

HERNANDO PEÑA MARTINEZ
Abogado
Derecho Civil - Laboral
Calle 40 N° 43-30 Ofc. 103. Tel: 3703461 cel: 312-6865123.
Email: pe.hernando@gmail.com
Barranquilla – Colombia

Señor
JUEZ TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE
SOLEDAD
E. S. D.

REF: EJECUTIVO

DEMANDANTE: YENIS DE JESUS RAMOS OSORIO

DEMANDADO : NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

RAD: 08758418900320210015100

HERNANDO PEÑA MARTINEZ, mayor de edad, con domicilio en Barranquilla, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.752.145 de Soledad, abogado titulado con T.P.# 40.390 del C.S. de la Jud., en mi condición de apoderado judicial de la parte demandada señora NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ, dentro del proceso de la referencia, de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de dar contestación a la demanda en los siguientes términos:

PRETENSIONES

En cuanto a las pretensiones me opongo a cada una de ellas en atención a que NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ, suscribió la letra de cambio que sirve de título ejecutivo. En ese sentido formularé la excepción de fondo de inexistencia de la obligación y falsedad ideológica.

HECHOS

En cuanto a los hechos, quiero manifestarle al despacho en relación al primero, que esto no es cierto, ya que nunca existió un contrato de intereses, donde mi poderdante NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ, se obligaba a pagar la suma de \$2.117.787, el día 23 de septiembre del 2019 , ya que mi poderdante si suscribió la letra de cambio pero fue como garantía, para el arriendo de un inmueble, ubicado en la calle 52 No. 24-65 en Villa Mundi Soledad, el cual aparece como arrendador el señor GENARO ANTONIO RAMOS NUÑEZ, y como arrendataria mi poderdante, y nunca firmo la

mencionada letra a favor de la demandante, modalidad esta que esta prohibido por la Ley tal como lo indica el decreto ley 820 del 2003 de la ley de arrendamiento en su art. 16 en prohibiciones de garantías y depósitos, así mismo quiero manifestarle que una vez, entregado el inmueble el señor arrendador GENARO RAMOS NUÑEZ, nunca entrego o devolvió la letra de cambio, y con sorpresa nos enteramos que inicio el proceso ejecutivo por el mencionado titulo valor .

Al segundo hecho: esto no es cierto, ya que como lo dije anteriormente el titulo valor se entregó como garantía y no como un contrato de mutuo con interés, y se le hizo entrega de la letra de cambio al señor GENARO RAMOS NUÑEZ y no a YENIS DE JESUS RAMOS OSORIO.

Al tercero hecho: no es cierto a este hecho, por que como lo decimos anteriormente la letra de cambio, era una garantía para poder arrendar el inmueble y esto está prohibido por ley.

Al cuarto y quinto hecho: no es cierto, tal como lo manifesté anteriormente los hechos que antecede y que será objeto de las excepciones que presentare y ampliare en este mismo escrito.

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION

No habiendo título ejecutivo que contenga obligación alguna a cargo de **NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ**, deberá su señoría declarar probada la excepción en cuestión. Como fundamentos de esta excepción, debo indicar que si bien mi poderdante aparece como ejecutada en el proceso de la referencia; ejecución que se libró con fundamento en la letra de cambio presentado por el Dr. STIWARD EDUARDO RAMOS RESTREPO en su condición de demandante-arrendador en contra de la señora **NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ**, lo cierto, es que la letra que sirvió de recaudo ejecutivo en el presente proceso fue suscrita por mi poderdante, como garantía para que le pudiesen arrendar un inmueble, tal como lo manifestamos en el hecho primero de la contesta de la demanda y que probaremos, ya que nunca existió un contrato de mutuo con interés con la señora **YENIS DE JESUS RAMOS OSORIO** , y esta práctica está prohibida por ley ya que el art. 16 de la ley de arrendamiento decreto 820 del 2003. Lo prohíbe expresamente, En ese orden no existe obligación a cargo de **NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ** derivada de la letra de cambio que sirve de hontanar a la ejecución promovida por YENIS DE JESUS RAMOS OSORIO.

1º) COBRO DE LO NO DEBIDO

Se estructura esta excepción en el siguiente análisis:

Entre la señora Demandante **YENIS DE JESUS RAMOS OSORIO** y la Demandada **NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ**, no se dio en ningún

momento, un negocio de contrato mutuo con intereses, ya que la señora **NUBIA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ**, suscribió la letra de cambio que se presento como recaudo ejecutivo en el presente proceso, en blanco, y en ningún momento dio instrucciones para llenar los espacios, ya que el **señor GENARO RAMOS NUÑEZ**, exigía dicha letra para poder suscribir el contrato de arrendamiento, del inmueble ubicado en la calle 52 No. 24—65 Villa Munde de Soledad, y esta letra la exigía como garantía para poder arrendar el inmueble, inmueble este que le fue entregado al día en los cánones de arrendamiento y servicios públicos y nunca devolvió la letra que es objeto del presente proceso.

Ahora bien frente a las relaciones contractuales bajo el imperio de la buena fe, nuestra jurisprudencia constitucional se ha dirigido a que debe ser acatada en todas las actuaciones públicas o privadas. En la sentencia C-1194/08 la Corte Constitucional señaló: ***La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta (vir bonus). Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con transcendencia jurídica y se refiere a la confianza seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.***

2º). ABUSO DEL DERECHO:

La teoría del “abuso del derecho” se presenta como una excepción a esta visión absoluta, que no solamente apunta a señalar que en el ejercicio de cualquier derecho hay unos límites derivados de la finalidad social que lo justifica, sino que además, en punto de lo contractual, se debe estar alerta especialmente cuando la voluntad concurrente se enmarca en situaciones que ponen en duda la igualdad de los contratantes, el equilibrio de las cargas que soportan, aun cuando no se trate de situaciones enmarcadas dentro de los vicios de existencia y validez de los actos jurídicos.

Cada derecho subjetivo debe propender por la finalidad para la cual se concede, de otra manera su titular lo desviará de su cauce natural, con lo que incurre en un abuso. El acto abusivo es aquel contrario al propósito de la institución, a su espíritu y a su finalidad. (JOSSERAND, Louis, De l'esprit des droits et de leur relativité. No. 292 y ss). Se trata, por tanto, de un criterio, finalista o teleológico, pues debe observarse si existe conformidad del uso del derecho con su destinación social; finalidad esta que suministra el elemento de comparación necesario para determinar la legitimidad del ejercicio del derecho. Con esto se establecen límites “internos” a los derechos, esto es, restricciones provenientes de la exigencia de que su ejercicio corresponda con su “función social”. Así pues, este ejercicio deja ser justificado y pierde protección cuando desconoce el propósito último a que obedece el derecho. En consecuencia, es abusivo todo acto que, por sus móviles o por su fin, es opuesto a su destinación y a la función que le asigna la sociedad. En este orden de ideas, el titular de un derecho puede,

con torcida intención o sin ella, ejercitarlo de manera excesiva, inoportuna, o innecesaria, desviándola así de su finalidad última, con lo cual incurre, en todos estos eventos, en típico ejercicio abusivo del ese derecho. (Vease SUESCUN MELO, Jorge "Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo II. Ed. Legis 2005; pág 241)

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de octubre de 1994, MP Dr Carlos Esteban Jaramillo Schloss, exp. 3972, al respecto indica: **"...el abuso de dichas prerrogativas, entonces, es un ilícito específico o 'sui generis' que sin duda alguna cuenta con suficiente autonomía conceptual y sus alcances superan en mucho los que la censura en este caso sugiere, habida cuenta que como en la actualidad lo dicen valiosos estudios sobre el tema, el deber jurídico de no excederse en el ejercicio de un derecho subjetivo, de evitar su empleo de manera antisocial o inmoral o que contradiga la finalidad socioeconómica que dicha potestad tiene, es parte integrante de toda situación jurídica individual activa o de poder y de carácter patrimonial, su sustancia es por lo tanto la de un deber genérico que toma pie en el principio general de derecho prohibitivo del abuso en cualquiera de sus modalidades y al cual, para decirlo con palabras de un ilustre tratadista, jamás puede serle extraña la materia contractual pues esta noción moral que como tantas otras viene a fecundar la altiva juridicidad '... hoy se la utiliza también para controlar el goce y ejercicio de los derechos derivados de los contratos a fin de que este ejercicio no sea ilícito o ilegítimo e impedir así que los contratantes se sirvan de los derechos que los contratos crean con una finalidad distinta de aquella para la cual estos fueron pactados..."**

Finalmente la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010), REF.: 11001-3103-027-2005-00590-01, Magistrado Ponente: CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE, señala: **"... Bajo ese derrotero, al pregonar la Sala que en "...materia contractual tiene cabida el abuso del derecho", el que puede "...presentarse en la formación del contrato, en su ejecución, en su disolución y aún en el periodo post-contratual" (G. J., t. LXXX, pag. 656), fluye con notoria nitidez cómo la Corporación ha reconocido la vigencia y posibilidad del fenómeno, aún por fuera del espacio inicial, circunscrito al ejercicio de la propiedad, para llegar a admitir la extralimitación en las facultades nacidas de los acuerdos de voluntades, pues en esos casos puede ocurrir el comportamiento de uno de los pactantes que, aunque pareciera respaldado por el derecho que en verdad le asiste, actúe "...con detrimento del equilibrio económico de la contratación..." (G. J., t. CCXXXI, pag. 746); de esta manera, la jurisprudencia también vino a señalar cómo es posible que por este aspecto fuese dable fijar límites a la autonomía de la voluntad en materia negocial.**

La Corte suprema de justicia, Sala de casación civil, Magistrado ponente: WILLIAM NAMÉN VARGAS, en providencia de veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009) Exp. 11001-0203-000-2008-02009-00, señaló: **"si bien la autorización para recaudar cuotas de administración para el pago de las expensas comunes necesarias y demás gastos de sostenimiento de la**

copropiedad encuentra soporte en la Ley de Propiedad Horizontal, el sometimiento de un determinado edificio, conjunto o unidad a dicha ley, así como el reglamento que habrá de regir a la Propiedad Horizontal creada, nacen del acuerdo de voluntades de los propietarios de áreas individuales, plasmado en un contrato que al elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro de Instrumentos Públicos constituye una persona jurídica (artículo 4, Ley 675 de 2001). De allí que las cuotas de administración no puedan ser consideradas una obligación de fuente legal, por cuanto es el reglamento de propiedad horizontal «el concurso real de las voluntades de dos o más personas» (artículo 1494 del C.C.) de someterse a las disposiciones de dicha ley y a la regulación plasmada por ellas en lo atinente a la nueva persona jurídica, incluyendo derechos y deberes de los copropietarios”

Por todo ello nos atrevemos a decir que la parte demandante se aleja de los principios de buena fe contractual, pues trata de cobrar una suma de dinero, totalmente falsa y que mi poderdante ha debido, ya que lo que hizo fue suscribir un título valor, en blanco, igualmente trata de engañar cuando señala que no se le ha cancelado ni el capital ni intereses, de la letra que presenta como recaudo ejecutivo, teniendo pleno conocimiento que ello no es así.

3. FALTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR LOS TITULOS Y/O POR FUERA DELAS MISMAS

De la excepción anterior tenemos que el título valor fue llenado sin el lleno de los requisitos legales, por lo siguiente:

La demandante procedió a llenar los espacios en blanco, en especial la fecha de creación del título, fecha de vencimiento del título valor del capital, por fuera de la realidad y sin instrucción alguna, pues el negocio que dio origen a la letra de cambio, fue el contrato de arrendamiento que celebro mi poderdante con el señor **GENARO RAMOS NUÑEZ**, del inmueble ubicado en la calle 52 No. 24—65 Villa Mundi de Soledad, y esta letra la exigía como garantía para poder arrendar el inmueble-

Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-673 de 2010, M.P. Dr. JORGE PRETELT CHALJUB, expresa:

Los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco, pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se lleno de acuerdo a las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complemento los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron. Esta Sala considera que respecto al defecto sustantivo, el fallo que se acusa incurrió en una vía

de hecho por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso por adelantar un proceso ejecutivo contra la tutelante con una letra de cambio en blanco que se llenó sin cumplir los requisitos que establece el artículo 622 del Código de Comercio y lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-943 de 2006. la Sala concluye que el Juez incurrió en error ostensible, flagrante y manifiesto en la valoración de las pruebas, pues afirmó que las declaraciones de la señora no eran suficientes para establecer la literalidad del título, cuando a su vez contaba con el experticio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el cual señalaba que los espacios en blanco no los llenó Yolanda Serpa Cabrales. En consecuencia, en dos pruebas judiciales se demostró que la letra de cambio se suscribió sin existir la respectiva carta de instrucciones, la cual es indispensable para su exigibilidad de conformidad al artículo 620 del Código de Comercio, la Sentencia T- 943 de 2006 y los conceptos de la Superintendencia Financiera. Por tanto, la Sala concluye que el Juez demandado incurrió en un defecto fáctico al no evaluar adecuadamente y de conforme a la sana crítica las pruebas que practico en el proceso ejecutivo. Por las anteriores circunstancias, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de por los defectos sustancial y fáctico, por cuanto se adelantó en su contra un proceso ejecutivo con un título ejecutivo en blanco, sin existir la respectiva carta de instrucciones.

EXCEPCIÓN GENÉRICA OFICIOSA.

El señor Juez deberá, de conformidad con el artículo 282 del C.G.P., tener como excepción de mérito cualquier hecho o circunstancia que resultare probada en el expediente y que enerve las pretensiones del actor y deberá reconocerlas en la sentencia, de oficio.

PRUEBAS

Solicito tener como prueba:

1. El contrato de arrendamiento.
2. Poder para actuar.

INTERROGATORIO:

Sírvase citar y hacer comparecer a su despacho a la señora Demandante **YENIS DE JESUS RAMOS OSORIO** (con domicilio en esta ciudad, quien puede ser localizado en la dirección que se encuentran en la demanda, para que absuelvan el interrogatorio que oralmente o en sobre cerrado les hare sobre los hechos de la demanda, contestación de las misma y las excepciones, en la fecha y hora que lo decrete el despacho.

DECLARACION DE TERCEROS

De conformidad con las normas establecidas en los art. 208 y siguientes declaración de terceros del Código General del Proceso, en particular, el artículo 212 – petición de las pruebas y limitación de testimonios. Me permito solicitar respetuosamente a las señoras Juez, se sirva decretar la practicas en audiencia del testigo que se menciona a continuación.

1. GERALDINE REYES GARCIA, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1143439510, con domicilio en la calle 110 No. 76-40 de Medellín Antioquia
2. ESNEIDER GALAN MENCO, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1143132030, con domicilio en la calle 52 No. 44-11 VILLA MUNDI, de esta ciudad.

Atentamente,



HERNANDO PEÑA MARTINEZ
C.C. No. 8,752,145 de Soledad
T.P. No. 40,390 del C.S. DE LA J